

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO



JUZGADO NOVENO DE FAMILIA BOGOTÁ D.C. EN ORALIDAD
Bogotá D.C, Dieciocho (18) de enero de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: **Acción de Tutela**
Radicación: **2022-00883**

I. ASUNTO:

Dentro de la oportunidad prevista en el artículo 29 del Decreto 2591 de 1991, procede el Juzgado a resolver la acción de tutela instaurada por **FIDEL ANTONIO CORCHUELO BELLO** en contra del **CPMSBOG - CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BOGOTÁ- OFICINA JURÍDICA**.

II. ANTECEDENTES:

2.1.- HECHOS (SÍNTESIS):

2.1.1.- Manifiesta el accionante que solicitó al establecimiento Cárcel y penitenciaria la Modelo, que envíe al juzgado 14 de Ejecución de penas y medidas de seguridad la redención de penas hecha en la Cárcel Distrital y en la Cárcel La Modelo y a la fecha no han dado cumplimiento.

2.1.2.- Sostuvo que, en respuesta por parte de la Cárcel Distrital se indicó que ya enviaron a la Cárcel Modelo la cartilla bibliográfica mediante resolución No 142-5240 del 24 de noviembre de 2021 y que la misma fue notificada el 26 de octubre de 2022.

2.2. PETICIÓN:

“Se disponga y se ordene que se envíe toda mi redención hecha en la distrital y acá en la modelo y así poder obtener mi libertad ya que estoy pasado de esta.”

III. ACTUACIÓN PROCESAL:

Mediante auto del 15 de noviembre de 2022 se admitió la acción constitucional y se ordenó notificar a las partes, y solicitarle a la entidad accionada y vinculadas contestar el libelo dentro del término de Dos (2) días.

3.1. RESPUESTAS:

DIRECCIÓN GENERAL DEL INPEC (archivo digital 010): Se opuso al amparo y solicitó la desvinculación, por cuanto por competencia funcional le corresponde al EPC CPMSBOG – MODELO BOGOTA a través de su equipo de trabajo, por lo que me permito indicar los siguientes argumentos facticos y jurídicos.

Así mismo, indicó que, la Dirección General del INPEC, no está violando derechos fundamentales del señor, **FIDEL ANTONIO CORCHUELO BELLO** al no dar respuesta al derecho de petición. El responsable de dar respuesta al derecho de petición

es el EPC CPMSBOG – MODELO BOGOTA a través de su equipo de trabajo, toda vez que es allí donde se puede verificar lo manifestado por el accionante.

Indica que en virtud de lo anterior, mediante correo electrónico se dio traslado de los documentos remitidos por su Despacho al EPC CPMSBOG – MODELO BOGOTA a fin de que acorde a su competencia funcional se pronuncien con relación a los hechos detallados en la acción constitucional que nos ocupa.

Solicita se desvincule a la Dirección General Del INPEC de la presente acción de tutela; por cuanto por competencia funcional le corresponde al EPC CPMSBOG – MODELO BOGOTA atender los requerimientos del privado de la libertad.

JUZGADO 14 DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE BOGOTÁ: Señalo que, el señor MIGUEL ANTONIO CORCHUELO BELLO, fue condenado por el Juzgado 18 penal del circuito de Conocimiento de Bogotá el 21 de marzo de 2017 a la pena principal de 108 meses de prisión, a la accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo lapso de la pena principal, como autor penalmente responsable del delito de ACTOS SEXUALES CON MENOR DE 14 AÑOS, negándole la suspensión condicional de la pena la prisión domiciliaria.

Que para efectos de la vigilancia de la pena del condenado ha estado privado de la libertad por cuenta de este proceso desde el 13 de octubre de 2015 hasta la fecha sin solución de continuidad es decir 86 meses y 3 días de prisión, que sumado lo de la fase de ejecución de penas y medidas de seguridad lleva un total de pena cumplida de 106 meses, 27.66 días, por tal razón a la fecha no cumple con los requisitos para ser puesto en libertad.

Que por parte de ese despacho no se han vulnerado los derechos del accionante y solicita se nieguen las pretensiones frente a ellos.

EPC CPMSBOG – MODELO BOGOTA: A pesar de encontrarse debidamente notificada no emitió pronunciamiento alguno.

IV. CONSIDERACIONES:

4.1. COMPETENCIA:

Este Juzgado es competente para conocer de la acción de tutela con fundamento en lo dispuesto en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1.991.

4.2.- PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN:

La acción de tutela se instituyó por el constituyente de 1991, en el artículo 86 de la Constitución Política, con la finalidad exclusiva de proteger de manera efectiva los derechos fundamentales de las personas cuando estos sean violados o puestos en peligro por acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares, estos últimos, en los casos expresamente señalados por la ley.

Sin embargo, el acceso a este procedimiento preferente y sumario es procedente siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial que sea idóneo, apreciado en concreto, a menos que se utilice

como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable y, por lo mismo, no es alternativo sino residual.

Según lo previsto en el numeral 2º del Decreto 306 de 1992 (reglamentario del Decreto 2591 de 1991), dicha acción protege exclusivamente los derechos constitucionales fundamentales, por ende, no puede emplearse, para hacer respetar derechos que sólo tengan rango legal, ni para hacer cumplir las leyes, los decretos, los reglamentos o cualquiera otra norma de rango inferior.

4.2.1. DE LOS REQUISITOS GENERALES DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA:

- Legitimación por activa:

El artículo 86 de la Constitución Política dispone el derecho de toda persona de reclamar mediante acción de tutela la protección inmediata de sus derechos fundamentales. Este precepto constitucional se desarrolla en el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, en el que se consagra que *“la acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos. También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud”*.

En el caso bajo examen, el señor **FIDEL ANTONIO CORCHUELO BELLO** acudió a la acción de tutela para que se protegiera su derecho fundamental de petición, el cual afirma está siendo conculcado como consecuencia de la falta de una respuesta fondo por parte de la entidad accionada a su solicitud. Por lo anterior, se encuentra legitimada en la causa por activa para presentar la acción constitucional.

- Legitimación por pasiva

Como quiera que la legitimación pasiva atiende a la capacidad legal de la entidad contra quien se dirige la acción, a efectos de que sea llamada a responder por la vulneración o amenaza de uno o más derechos fundamentales, el inciso primero del artículo 86 Constitucional señala que procede la acción de tutela cuando los derechos fundamentales *“resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública”* o por cualquier particular. A su vez, el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991 consagra que la acción se puede invocar contra una autoridad pública que haya vulnerado o amenazado algún derecho de rango constitucional fundamental.

En el asunto *sub-judice*, se encuentra acreditado el requisito de legitimación en la causa por pasiva del **CPMSBOG - CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BOGOTÁ- OFICINA JURÍDICA**, a la que se le endilga la presunta actuación que se considera lesiva de los derechos fundamentales invocados por la accionante, y que se relaciona con la omisión de darle una respuesta de fondo a su petición.

- Inmediatez

La Corte Constitucional indicó en la Sentencia SU-961 de 1999 que *“La tutela debe interponerse dentro de un plazo razonable. La razonabilidad de este plazo está determinada por la finalidad misma de la tutela, que debe ser procedente en cada caso concreto. De acuerdo con los hechos, el juez está encargado de establecer si la tutela se interpuso dentro de un tiempo prudencial y adecuado, de tal modo que no se vulneren derechos de terceros”*.

En el presente asunto, se tiene que, entre la fecha de radicación de la petición por parte del accionante ante el **CPMSBOG - CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BOGOTÁ- OFICINA JURÍDICA** el 27 de octubre de 2022, y en la que presentó la acción constitucional, 13 de diciembre de 2022 (archivo digital 06), han transcurrido más de veinte (20) días por lo cual, este Despacho considera que se cumple con este requisito.

- Subsidiariedad

Al respecto, en Sentencia T-422 de abril 26 de 2001 la Corte Constitucional señaló: *“(…) la naturaleza de la acción de tutela, de conformidad con los artículos 86 de la Carta Política y 6º numeral 1º del Decreto 2591 de 1991, es la de ser un medio de defensa judicial subsidiario y residual que sólo opera cuando no existe otro instrumento de protección judicial, o cuando a pesar de existir, se invoca como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, de manera que no puede utilizarse para remplazar los procesos judiciales o administrativos, pues su finalidad no es otra que brindar a las personas una protección efectiva, real y eficaz, para la garantía de sus derechos constitucionales fundamentales. En consecuencia, riñe con la idea de admitirla a procesos administrativos o judiciales en curso o ya terminados, en cuanto unos y otros tienen mecanismos judiciales ordinarios para la protección de derechos de naturaleza constitucional o legal, que por lo tanto la hacen improcedente”*.

En el presente caso, la parte actora no cuenta con un mecanismo judicial eficaz diverso al que nos ocupa para obtener respuesta de fondo por parte de la entidad accionada y las vinculadas a las peticiones que elevó el 27 de octubre de 2022, , lo que hace viable esta acción.

Establecida entonces la procedencia de la acción de tutela en el caso concreto, se continuará con el examen de los asuntos de fondo.

4.3. ALCANCE DEL DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN:

El derecho de petición se encuentra consagrado en el artículo 23 de nuestra Constitución Política y dispone que: *“Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución (...)”*. En torno a este derecho la Corte Constitucional en la sentencia T-081 de 2007, expresó:

“1. La jurisprudencia constitucional ha señalado que el núcleo esencial del derecho de petición comprende los siguientes elementos o características:

(i) la posibilidad cierta y efectiva de presentar, de manera respetuosa, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas;

(ii) la facultad de obtener una respuesta oportuna, esto es, dentro de los términos previstos en el ordenamiento jurídico;

(iii) el derecho a recibir una respuesta de fondo o contestación material, lo que supone que la autoridad analice la materia propia de la solicitud y se pronuncie sobre la totalidad de los asuntos planteados; es decir, que haya correspondencia entre la petición y la respuesta, sin fórmulas evasivas o elusivas;

(iv) la pronta comunicación al peticionario sobre la determinación adoptada, con independencia de que su contenido sea favorable o desfavorable”.

En el mismo sentido, la Sentencia T-957 de 2004 indicó que la respuesta a los derechos de petición debe ser de fondo, pues:

“la Corte Constitucional se ha pronunciado en numerosas oportunidades sobre el contenido y el alcance generales del derecho de petición, en virtud del cual toda persona puede presentar peticiones respetuosas ante las autoridades, y obtener una pronta resolución. Según se ha precisado en la doctrina constitucional, esta garantía constitucional “consiste no sólo en el derecho de obtener una respuesta por parte de las autoridades sino a que éstas resuelvan de fondo, de manera clara y precisa la petición presentada”. Asimismo, tal respuesta debe producirse dentro de un plazo razonable, el cual debe ser lo más corto posible, “pues prolongar en exceso la decisión de la solicitud, implica una violación de la Constitución”

A su vez, la Ley 1437 de 2011 modificada por la Ley 1755 de 2015, en su artículo 13 prescribe que: “(...) Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, sin que sea necesario invocarlo. Mediante él, entre otras actuaciones, se podrá solicitar: el reconocimiento de un derecho, la intervención de una entidad o funcionario, la resolución de una situación jurídica, la prestación de un servicio, requerir información, consultar, examinar y requerir copias de documentos, formular consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos. (...)”.

Conforme a lo expresado, las respuestas emitidas por las autoridades en atención a las peticiones elevadas por los particulares deben ser oportunas, prontas y de fondo, es decir, que resuelvan en forma completa y total las solicitudes presentadas, en forma clara, precisa y congruente con la solicitud. Adicional a lo anterior, la petición debe ser puesta en conocimiento del solicitante, toda vez que lo contrario tornaría ineficaz el derecho de petición que, se reitera, es de rango constitucional.

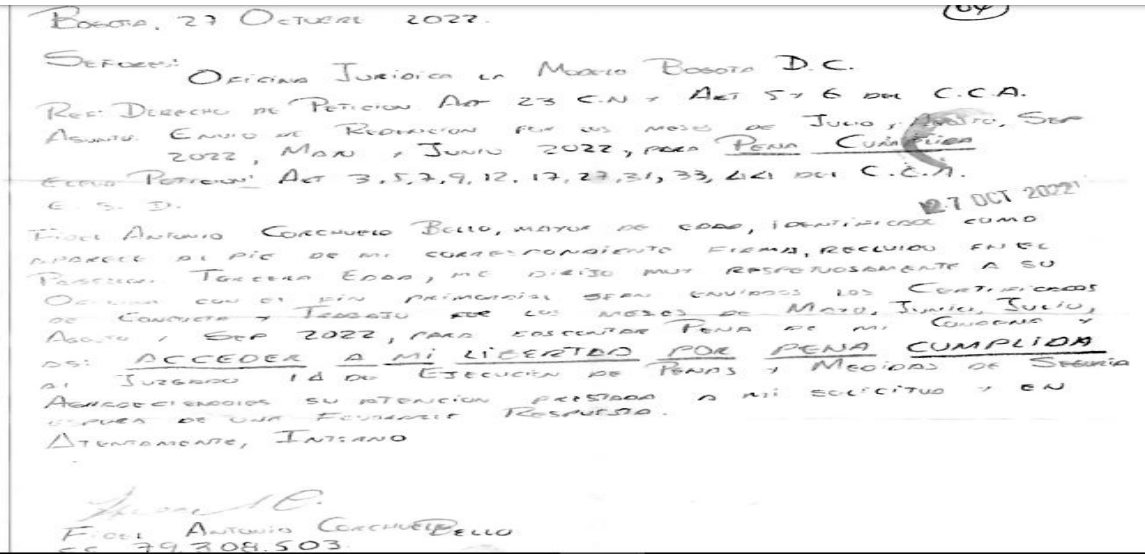
V. CASO EN CONCRETO:

5.1.- El problema jurídico a desatar consiste en determinar si el **CPMSBOG - CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BOGOTÁ- OFICINA JURÍDICA**

vulneró los derechos fundamentales de petición e igualdad del señor **FIDEL ANTONIO CORCHUELO BELLO** respecto de la solicitud que radicó el 27 de octubre de 2022.

5.2.- Se encuentra incorporada al expediente la petición elevada por los accionantes ante el **CPMSBOG - CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BOGOTÁ- OFICINA JURÍDICA** el 27 de octubre de 2022, solicitando:

“(…)



Bogotá, 27 Octubre 2022.

SEÑORES: OFICINA JURÍDICA LA MEXIA BOGOTÁ D.C.

REF: DERECHO DE PETICIÓN ART 23 C.N + ART 57.6 DEL C.C.A.

ASUNTO: ENVÍO DE REDIMICIÓN POR LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPT 2022, MARZO Y JUNIO 2022, PARA PENA CUMPLIDA

EFECTU PETICIÓN ART 3, 5, 7, 9, 12, 17, 23, 31, 33, 44 DEL C.C.A.

E. S. D.

FIDEL ANTONIO CORCHUELO BELLO, MAYOR DE EDAD, IDENTIFICADO COMO APARECE AL PIE DE MI CORRESPONDIENTE FIRMA, RECEBÍO EN EL PASADORA TORRENA EDDA, ME DIERON MUY RESPONOSAMENTE A SU OFICINA CON EL FIN PRIMORDIAL SEAN ENVÍADOS LOS CERTIFICADOS DE CONDUCTA Y TENDIDO DE LOS MESES DE MARZO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPT 2022, PARA ESCUTAR PENA DE MI CONDUCTA Y ASI: ACCEDER A MI LIBERTAD POR PENA CUMPLIDA

AL JUZGADO 14 DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD AGRADECERÍA SU ATENCIÓN PRESTADA A MI SOLICITUD Y EN ESPERA DE UNA FAVORABLE RESPUESTA.

ATENTAMENTE, INTERNO

FIDEL ANTONIO CORCHUELO BELLO
CC 39.208.503

(Página 5, archivo digital 004)

5.3.- En el asunto bajo estudio, la parte actora acudió a la acción de tutela por considerar que el **CPMSBOG - CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BOGOTÁ- OFICINA JURÍDICA** está vulnerando sus derechos de petición, al no dar respuesta a las peticiones presentadas el 27 de octubre de 2022.

Por su parte, la entidad accionada no contesto el requerimiento a pesar de encontrarse debidamente notificada y el INPEC entidad vinculada se limitó a indicar que la presentación de la acción constitucional resulta improcedente toda vez que no resulta de su competencia, que el responsable de dar respuesta al derecho de petición es el **CPMSBOG - CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BOGOTÁ- OFICINA JURÍDICA** a través de su equipo de trabajo, toda vez que es allí donde se puede verificar lo manifestado por el accionante.

Por lo anterior, resulta palmario concluir que la entidad demandada conculcó el derecho de petición del señor **FIDEL ANTONIO CORCHUELO BELLO**, al no allegar constancias que se hubiese remitido al accionante respuesta de la petición presentada el 27 de octubre de 2022, y no se acreditó que la vinculada remitiera las peticiones a la entidad que según su dicho es la competente, conforme lo dispone el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011 que indica:

ARTÍCULO 21. FUNCIONARIO SIN COMPETENCIA. <Artículo modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015. El nuevo texto es el siguiente:> Si la autoridad a quien se dirige la petición no es la competente, se informará de inmediato al interesado si este actúa verbalmente, o dentro de los cinco (5) días siguientes al de la recepción, si obró por escrito. Dentro del término señalado remitirá la petición al competente y enviará copia del oficio

remisorio al peticionario o en caso de no existir funcionario competente así se lo comunicará. Los términos para decidir o responder se contarán a partir del día siguiente a la recepción de la Petición por la autoridad competente. (Se subraya para destacar)

En consecuencia, se ordenará al **CPMSBOG - CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BOGOTÁ- OFICINA JURÍDICA** que, en el término perentorio e improrrogable de 48 horas, contado a partir de la notificación de esta sentencia, resuelva lo que en derecho corresponda en relación con el escrito presentado por los accionantes el 27 de octubre de 2022, o en su defecto acredite las constancias de remisión de lo solicitado al accionante.

En mérito de lo expuesto, EL JUEZ NOVENO DE FAMILIA DE BOGOTÁ D.C., “administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley”,

VI. RESUELVE:

PRIMERO: CONCEDER la acción de tutela impetrada por el señor **FIDEL ANTONIO CORCHUELO BELLO** en contra del **CPMSBOG - CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BOGOTÁ- OFICINA JURÍDICA**, por los argumentos esbozados en la parte considerativa.

SEGUNDO: ORDENAR al **CPMSBOG - CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BOGOTÁ- OFICINA JURÍDICA** que, dentro del término perentorio e improrrogable de 48 horas, contado a partir de la notificación de esta sentencia, resuelva lo que en derecho corresponda en relación con el escrito presentado por el accionantes el 27 de octubre de 2022.

TERCERO: DESVINCULAR de la presente acción al **DIRECTOR GENERAL DEL INPEC, DIRECTOR (A) REGIONAL CENTRAL DEL INPEC, AL JUZGADO 14 DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE BOGOTÁ.**

CUARTO: NOTIFICAR esta decisión a los intervinientes, a través del medio más expedito. **SECRETARÍA PROCEDA DE CONFORMIDAD.**

QUINTO: Si no fuere impugnada la decisión, envíese a la H. Corte Constitucional para su eventual revisión.

CÚMPLASE



CESAR ENRIQUE OSORIO ORTIZ

JUEZ